

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

Medellín, nueve (09) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 006 2016 01176 01, promovido por el señor **HERNÁN HORACIO VALENCIA AGUILAR**, en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del demandante frente a la sentencia emitida el 25 de julio de 2018 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **060**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

## **ANTECEDENTES**

El señor Hernán Horacio Valencia Aguilar, demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: retroactivo de la pensión especial de vejez por hija inválida causado desde el 1° de enero de 2015, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que su hija Irsa Lorena Valencia Aguilar nació el 3 de febrero de 1984, padece una pérdida de capacidad laboral del 96.35%, estructurada desde su nacimiento y depende económicamente de él. El 31 de julio de 2014, reclamó ante Colpensiones la pensión especial de vejez por hija discapacitada, y la entidad por medio de la Resolución GNR 127348 de 30 de abril de 2015 se la negó aduciendo que las declaraciones extra juicio no determinaban la calidad de padre cabeza de familia. Frente al acto administrativo aludido interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, mismo que fueron resueltos de manera desfavorable a través de las Resoluciones GNR 127348 de 30 de abril y VPB 70055 de 11 de noviembre de 2015. Aduce que por temor a perder el derecho pensional decidió continuar cotizando al sistema de pensiones, pues Colpensiones exigía como requisito para el reconocimiento encontrarse activo para la fecha de la solicitud. El 21 de diciembre de 2015, solicitó nuevamente la pensión especial de vejez por hija discapacitada, misma que le fue concedida mediante la Resolución GNR 44082 de 10 de febrero de 2016, a partir del 1° de los mismos mes y año, en cuantía de \$1.197.500. Agrega que el 18 de abril de 2016, agotó reclamación administrativa sin recibir respuesta.

En sentencia proferida el 25 de julio de 2018, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de las pretensiones de la demanda, y condenó al actor a pagar las costas del proceso.

La juzgadora de primera instancia, precisó que en su criterio solo hasta el 21 de diciembre de 2015, cuando el actor reclamó nuevamente la pensión especial de

vejez por hija discapacitada, cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la prestación, pues en esa fecha allegó ante la entidad la declaración extrajuicio rendida por las señoras Doris Yaneth Zapata y Magdalena Emilce Henao, quienes daban cuenta de su condición de padre cabeza de familia, del sustento económico de su hija invalida y su grupo familiar, y del cuidado que lo proporcionaba a aquella en razón de las dolencias de su cónyuge. Que, en razón de lo anterior, no procede el pago del retroactivo pensional deprecado desde el 1° de enero de 2015, porque aparte de que el disfrute de la pensión está supeditado a la desafiliación del sistema; la historia laboral del accionante da cuenta que el citado efectuó aportes hasta diciembre de 2015, pues en el interrogatorio de parte afirmó que laboró hasta el 9 de los mismos mes y año, por lo que dichas cotizaciones tuvieron una causa legal, como lo era la vigencia de la relación laboral, máxime que la finalidad de la pensión especial de vejez por hijo discapacitado es suplir con el pago de la mesada pensional, el salario devengado por el asegurado, por ello, para su reconocimiento se requiere la desvinculación laboral.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

La apoderada del demandante, inconforme con la decisión de primera instancia, precisó. Primero, que para el 31 de julio de 2014, fecha en la cual su representado solicitó la pensión especial de vejez por hija discapacitada, acreditó ante Colpensiones la totalidad de los requisitos para acceder a la prestación. Segundo, que, si la entidad para dicha data consideró que la declaración extra juicio allegada por el actor donde se indica: “...*manifiesto que sostengo económicamente en todos los sentidos a mi hija Irsa Lorena Valencia Aguilar la cual es discapacitada físicamente y mentalmente, por tal razón soy el único que vela de un todo y por todo de ella y de su grupo familiar...*”, no era clara y suficiente para acreditar la condición de padre cabeza de familia, debió ejercer sus facultades investigativas, entre ellas, indagando al afiliado y a su núcleo familiar, a fin de establecer las circunstancias de modo, la convivencia, sostenibilidad del hogar y el cuidado de Irsa Lorena Valencia Aguilar. Tercero, que la calidad de padre cabeza de familia es un criterio subjetivo, máxime que la norma exige que el afiliado se encuentre vinculado

laboralmente, lo cual impide atender al hijo inválido. Cuarto, que Colpensiones en la Resolución de diciembre de 2014, señala que “...revisado el expediente administrativo se evidencian declaraciones extra juicio, pero que estas no determinan la calidad de padre cabeza de familia, ni cuyos miembros dependan económicamente de él, de igual forma tampoco se acredita que tenga un trabajo que le impida atender a su hija invalida y que de dicho ingreso dependa el sustento familiar manifestaciones que deben ser indicadas en dichas declaraciones de manera expresa...”, no obstante, solo hasta la fecha de expedición del acto administrativo referido el accionante “...tuvo conocimiento de cómo se debía rendir la declaración extra juicio...”, ya que Colpensiones al momento de la reclamación, se limitó a indicar que debía rendir una declaración extra juicio donde manifestara la dependencia económica de su hija en situación de invalidez. Quinto, que conforme lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, la fecha de causación y el disfrute de cualquier pensión, específicamente la pensión especial de vejez por hijo discapacitado, en el caso del demandante se causó desde el 31 de julio de 2014, con fecha de disfrute del 1º de enero de 2015, por cuanto la obligación del citado de cotizar al sistema de pensiones cesó en diciembre de 2014, no obstante, continuó efectuando aportes en la medida que Colpensiones le exigía tal requisito para el momento de la reclamación pensional.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada del demandante allegó dentro del término legal escrito de alegatos de conclusión, haciendo referencia a los argumentos del recurso de apelación, y precisando que, desde la primera reclamación, aquel cumplía cada uno de los requisitos para acceder a la prestación económica deprecada, no pudiéndolo hacer por culpa imputable única y exclusivamente de Colpensiones, forzándolo a seguir trabajando y realizando cotizaciones, por el temor de no poder acceder a tal prestación, para después, bajo las mismas premisas, proceder a su reconocimiento sin retroactivo alguno.

El apoderado de Colpensiones solicita se confirme la decisión absolutoria de primera instancia.

## **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico de esta segunda instancia consiste en determinar si al demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el 1° de enero de 2015, derivado de la pensión especial de vejez por hija discapacitada, a intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio indexación.

## **CONSIDERACIÓN PRELIMINAR**

Examinada en conjunto la prueba documental que milita en el expediente, la Sala encuentra:

i) Que Irsa Lorena Valencia Londoño, hija del demandante, nació el 3 de febrero de 1984 y desde esta fecha padece una pérdida de capacidad laboral del 96.35%, conforme a Dictamen de Calificación emitido por Colpensiones el 19 de marzo de 2014.

ii) Que el 31 de julio de 2014, el actor le reclamó administrativamente a Colpensiones la pensión especial de vejez por hija inválida, y esta entidad por medio de la Resolución GNR 425392 de 16 de diciembre de 2014, se la negó con el argumento de que *“...revisado el expediente administrativo se evidencian declaraciones extra juicio, pero estas no determinan la calidad de padre cabeza de familia, ni que cuyos miembros dependan económicamente de él, de igual forma tampoco se acredita que tiene un trabajo que le impide atender a su hija invalida, y que de dicho ingreso depende el sustento familiar, manifestaciones que deben ser indicadas en dichas declaraciones extra juicio de manera expresa...”*. En tal resolución reconoce en favor del afiliado 1.323 semanas sufragadas hasta el 30 de noviembre de 2014. Y precisa como requisitos de procedencia de la prestación:

- Acreditar a través de declaración extrajuicio: 1) la condición de padre cabeza de familia, cuyos miembros dependen económicamente de él, y 2)

que tiene un trabajo que le impide atender a su hijo inválido y que de dicho ingreso depende el sustento familiar.

- Que el padre del hijo inválido debe estar cotizando al sistema general de pensiones al momento de la solicitud pensional.

iii) Que frente al acto administrativo fueron interpuestos los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales se desataron de manera desfavorable a través de las Resoluciones GNR 127348 de 30 de abril y VPB 70055 de 11 de noviembre de 2015, esta última notificada 7 días después, aduciendo que: *“...obra declaración juramentada de fecha 16 de junio de 2014 donde comparece el señor Hernán Horacio Valencia Aguilar, donde señala que: sostengo económicamente en todos los sentidos a mi hija Irsa Lorena Valencia Londoño, la cual es discapacitada física y mentalmente, por tal razón el único que vela de un todo y por todo de ella, e igualmente declaro que soy la persona encargada de cubrir en un 100% los gastos de su grupo familiar con formado por su esposa Blanca Rosa Londoño Ospina, la cual es ama de casa y por su hijo Wilder Hernán Valencia Londoño, mayor de edad y estudiante, y a su vez también presenta declaración extrajuicio donde el solicitante manifiesta su intención de renunciar al cargo o labor que actualmente desempeña a partir del momento en que se reconozca la pensión. Que no hay claridad en los hechos que determine la calidad de padre cabeza de familia, de igual forma tampoco se acredita que tiene un trabajo que le impide atender a una hija inválida y que de dicho ingreso depende el sustento familiar. Que en el caso en concreto se logró establecer que el peticionario goza de un núcleo familiar donde la madre es quien está dedicada a los cuidados de la hija inválida, desvirtuando la razón de ser de la pensión especial por hijo inválido, toda vez que esta tiene como naturaleza, dejar de laborar para poder cuidar a una persona inválida que no tiene quien la cuide...”*.

iv) Que el actor reclamó nuevamente la prestación económica el 21 de diciembre de 2015, y Colpensiones mediante la Resolución GNR 44082 de 10 de febrero de 2016, se la concedió a partir del 1º de febrero de 2016, en cuantía de \$1.197.500, y teniendo en cuenta para ello, 1.380 semanas de cotización hasta el 9 de diciembre de 2015, prestación que se ingresaría en la nómina de febrero de 2016, pagadera en el mes siguiente. Refiere el acto administrativo que: *“...obra declaración jurada de las señoras Doris Yaneth Zapata y Magdalena Emilce Henao, en la cual se indica*

*que la señora Irsa Lorena Valencia Londoño depende en forma absoluta de sus padres, opera sus cuidados, así mismo indica que la señora Blanca Rosa Londoño Ospina padece fuertes dolores de columna y espalda tras haber cuidado a su hija durante 32 años; y que además siempre ha sufrido de hipertensión y cefaleas constantes por lo que la joven necesita en la actualidad los cuidados de su padre, quien no puede atenderla como se debe, dado que es quien la sostiene económicamente en forma total, por lo que debe ausentarse a trabajar...”. Que así mismo obra declaración jurada del señor Hernán Horacio Valencia Aguilar donde indica que: “...en la actualidad, dada la edad de mi hija y su peso, se ha vuelto difícil de cuidar y mi esposa Blanca Rosa Londoño Ospina padece fuertes dolores de columna y espalda tras haber cuidado a nuestra hija durante más de 32 años, eso aunado a sus problemas de hipertensión y cefaleas lo que me ha obligado a ausentarme de mi trabajo en repetidas ocasiones. Cuidar a mi hija todas las noches para luego madrugar a trabajar y poner en riesgo la estabilidad económica del hogar pues me he visto en problemas en la empresa por dicha situación...”.*

iv) Que el demandante se afilió al sistema pensional del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 17 de mayo de 1988, y cotizó en dicha entidad desde esta fecha hasta el 9 de diciembre de 2015, de manera interrumpida un total de 1.380 semanas.

## DEL DERECHO PENSIONAL

Como premisa normativa, el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, consagra:

“...La madre trabajadora cuyo hijo **menor de 18 años** padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo...”.

El texto que aparece en negrilla fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional en sentencia C-227 de 2004.

Es importante referir que la mención hecha en la norma a *madre trabajadora* se hace extensivo al *padre trabajador* (sentencia C-989 de 2006).

La pensión especial de vejez por hijo discapacitado prevista en el inciso 2° del Parágrafo 4° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, constituye una excepción a la exigencia general actual de cumplir 60 años de edad los hombres y 55 años de edad las mujeres, para poder acceder a la pensión por vejez. El objeto de esta prestación es facilitarles a los padres o madres que trabajan, el tiempo y el dinero necesarios para atender a los hijos afectados por una invalidez física o mental que no les permita valerse por sí mismos, siempre y cuando éstos dependan económicamente de aquellos.

De la norma antes transcrita, así como los lineamientos de la Honorable la Corte Constitucional, se vislumbran los requisitos de la citada prestación, a saber: 1) Que el padre o la madre de familia de cuyo cuidado dependa el hijo discapacitado (menor o adulto), haya cotizado al Sistema General de Pensiones por lo menos el mínimo de semanas exigido para acceder a la pensión por vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 2) Que la discapacidad mental o física del hijo haya sido debidamente calificada, y no le permita a éste obtener los medios requeridos para su subsistencia, y 3) Que el hijo discapacitado dependa económicamente del afiliado al Sistema (Sentencias C-227 de 8 de marzo de 2004; C-989 de 29 de noviembre de 2006; T-729 de 22 de julio de 2008; T-651 de 17 de septiembre de 2009; T-176 de 12 de marzo de 2010; y T-657 de 28 de noviembre de 2016).

Adicionalmente, la Corporación mencionada, ha explicado que, para conservar el beneficio aludido, el hijo afectado por la invalidez física o mental debe permanecer en esa condición y continuar dependiendo de su padre o madre, y que éstos deben abstenerse de reingresar a la fuerza laboral (Sentencia T-176 de 12 de marzo de 2010, Expediente T-2455828).



En el mismo sentido la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 4032 de 2018, reiterada en la sentencia SL 3916 de 14 de octubre de 2020, Radicado 54.608 precisó:

“...En tal contexto, cuando el párrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003 apunta al mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez, se refiere a dos hipótesis: la primera, dirigida a los que no poseen derechos de transición, para quienes rige el número de aportes establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la propia Ley 797 de 2003 y, la segunda, a los beneficiarios del régimen de transición, quienes deberán acreditar las semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, pues conforme a la Ley 100 de 1993 a estas personas les aplica el régimen al cual se encontraban afiliados al 1.º de abril de 1994, en materia de densidad de cotizaciones, edad y monto.

Lo anterior, sin olvidar que el único estatuto anterior a la Ley 100 de 1993 admisible para definir densidad de cotizaciones para pensión especial de vejez, será el Acuerdo 049 de 1990, en tanto está cobijado en el régimen de prima media con prestación definida, tal como quedó explicado.

De esta forma, los potenciales beneficiarios de la pensión especial tantas veces mencionada, deben cumplir con el mínimo de contribuciones exigido en el régimen de reparto simple, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, salvo si son beneficiarios del régimen de transición, para quienes rige la densidad de aportes establecida en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, siempre que estuvieran afiliados al régimen de los seguros sociales obligatorios para el 1.º de abril de 1994...”.

Según el Alto Tribunal, la pensión especial de vejez referida contempla dos hipótesis: 1) en la que rige el número de aportes establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003 y, 2) en la que se deben acreditar las semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición.

En lo que tiene que ver con la condición de padre cabeza de familia la Alta

Corporación mencionada en las sentencias SL 17898 de 2016, SL 1991 de 2019, SL 3772 de 2019, SL 2585 de 8 de julio de 2020, Radicado 76.534 reiteradas en la sentencia SL 739 de 10 de marzo de 2021, Radicado 69.642 adoctrinó que la pensión especial en discusión no requiere que el progenitor a cargo del hijo inválido tenga la calidad de padre o madre cabeza de familia, porque: (i) el inciso 2° del párrafo 4° del artículo 9° de la Ley 797 de 2003 no establece esa exigencia, ni mucho menos puede ser interpretado restrictivamente y en disfavor de los intereses pensionales de los afiliados y aún del propio hijo en condición de invalidez; (ii) la norma no tiene el efecto de liberar de las obligaciones familiares y alimentarias a los padres, por tanto, es factible el soporte económico de ambos padres, y (iii) la idea que subyace a la pensión especial de vejez es que el progenitor abandone su vida laboral para dedicarse al cuidado pleno de su hijo, de lo cual puede inferirse también que la dependencia del hijo respecto al padre o madre debe ser preponderantemente económica.

En dicho orden de ideas indicó la Corte:

“...Tal beneficio especial, se otorga con el fin de que la madre o el padre de un hijo con un grado alto de vulnerabilidad, pueda compensar mediante el cuidado personal sus insuficiencias y colaborarle en el proceso de rehabilitación. Así pues, esta prestación tiende a favorecer a las personas afectadas por una minusvalía, quienes dentro del sistema jurídico colombiano merecen una especial protección conforme lo ordenan las disposiciones constitucionales y lo imponen las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia al suscribir tratados como la Convención Interamericana sobre los Discapacitados, aprobada mediante la Ley 762 de 2002.

En esa línea, para acceder a la prestación han de cumplirse tres condiciones:

- 1) que la madre o el padre haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos, el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez;
- 2) que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada;

3) que la persona discapacitada sea dependiente económicamente de su madre o de su padre, según fuere el caso.

A su vez, la disposición establece como condición de permanencia dentro de este régimen especial de pensión de vejez:

1) que el hijo permanezca en esa doble condición: afectado por la invalidez y dependiente de la madre o el padre, y

2) que el progenitor no se reincorpore a la fuerza laboral.

En el sub lite, le corresponde a la Sala analizar el tercero de los requisitos de acceso reseñados y, para el efecto, considera preciso acudir a los antecedentes legislativos de la norma que los contiene como herramienta hermenéutica para dilucidar su sentido original.

Así, se ha de advertir que en la exposición de motivos que acompañó la presentación del proyecto 98 de 2002 - Senado<sup>1</sup>, se señaló que el objetivo de la norma era concederle el beneficio de esta especial pensión de vejez, a la madre responsable de la manutención del hijo afectado por una invalidez física o mental, con el fin de facilitarle su acompañamiento y, en esa medida, propender por su cuidado y rehabilitación.

En tal perspectiva, se tiene que con dicha prestación especial se busca relevar al padre o la madre, del esfuerzo diario de obtener ingresos para la subsistencia no solo de su hijo sino también la propia, pues al beneficiarse de tal prestación se asegura el flujo monetario que le posibilitará compensar con su cuidado personal las insuficiencias de este último.

Y es precisamente, en ese sentido que la dependencia económica del hijo inválido respecto del progenitor que persigue la pensión especial, constituye uno de los condicionamientos para acceder a la misma. Sin embargo, para la Sala, contrario a lo entendido por Tribunal, tal exigencia no puede ser equiparada al concepto de «madre cabeza de familia» que, conforme al punto 1.3 del artículo 1 del Decreto 190 de 2003, corresponde a: «Mujer con hijos menores de 18 años de edad,

---

<sup>1</sup> Gaceta del Congreso N° 428 de 11 de octubre de 2002, pág. 1 a 5.

biológicos o adoptivos, o hijos inválidos **que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas**, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada» (resalta la Sala).

Lo anterior, por cuanto de la lectura desprevenida de esa última disposición, es dable concluir que deben converger dos situaciones para que las madres puedan ser catalogadas como «cabeza de familia». La primera, que sus hijos (menores o inválidos) dependan económicamente de ella y, la segunda, que tal subordinación financiera sea «exclusiva» o, lo que es igual, que sea la única proveedora de ingresos monetarios para el sostenimiento de sus descendientes.

Sin embargo, esa exigencia no se incluyó en la norma que establece la pensión especial pretendida en este asunto, pues en ninguno de sus apartes se refirió en sentido estricto a la calidad de madre cabeza de familia ni tampoco incluyó el requisito de «exclusividad» a que se hizo referencia.

Así pues, de acuerdo con el texto normativo y su espíritu teleológico al que se hizo alusión, para la Corte la interpretación de la norma en punto al requisito de dependencia económica del hijo inválido respecto del progenitor que persigue la pensión especial de vejez, debe observarse en los términos que se consagra la obligación de la manutención de los hijos -menores o incapacitados- que, como se sabe, se encuentra a cargo de ambos padres.

En efecto, el numeral 7 del artículo 42 de la Constitución Política, establece que «La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, **y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos**» (resaltado no es original). De ahí que por su consagración constitucional, el derecho de alimentos -entendido como: todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto<sup>2</sup>-, constituya por excelencia un derecho fundamental de toda persona, por tanto, la ley y la jurisprudencia deben propender por ubicar esta figura en claros escenarios de prevalencia.

---

<sup>2</sup> Artículo 24 de la Ley 1098 de 2006.

Ahora, en los términos del artículo 413 del Código Civil, los alimentos pueden ser congruos o necesarios y comprenden la obligación de ambos padres, de proporcionarlos a sus hijos hasta el advenimiento de la mayoría de edad, es decir, hasta los dieciocho (18) años según lo establece la Ley 27 de 1977. Esta limitante de la mayoría de edad, claramente resulta intrascendente, en el caso de que los hijos sean inválidos como en el sub lite, pues en tal caso, la obligación permanecerá indemne hasta tanto persista esa condición.

Y es que la obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos, se ubica en forma primigenia dentro de los deberes que se generan en el seno de una familia, y pese a que se trata de un tema preciso y específico del campo civil, varias disposiciones nacionales se ocupan del tema. Para no ir más lejos, en materia de seguridad social, en tratándose de las pensiones de sobrevivientes, cuando los beneficiarios son hijos menores de edad, esta Sala ha sostenido que se presume la dependencia económica respecto del causante, posición que también ha sido avalada por la Corte Constitucional.

**Entonces, la falta de la condición de madre cabeza de familia, no puede erigirse como un elemento constitutivo de marginación para acceder a la prestación reclamada, cuando, por lo visto, los hijos menores e inválidos, por ley dependen económicamente de sus dos progenitores,** y precisamente, la pensión especial propende porque uno de ellos pueda dedicarse al cuidado de su descendiente inválido, sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado sino de su padre o madre según el caso.

Por eso, resulta claro que ese derecho también está ligado a otras garantías fundamentales como el mínimo vital, alimentos y seguridad social.

En esencia, no puede avalarse una interpretación restrictiva del precepto que consagra la prestación pensional que se reclama, en los términos que lo realizó el Tribunal, pues hacerlo, sería tanto como condicionar su procedencia a la extinción de un deber jurídico del otro progenitor, esto es, de su obligación de brindar alimentos a su hijo inválido.

Así las cosas, la exégesis que le imprime la Sala al mencionado requisito de dependencia económica para acceder a la pensión especial consagrada en el

parágrafo 4 del artículo 9, inciso 2 de la Ley 797 de 2003, coincide con el interés proteccionista del legislador frente a este grupo de extrema vulnerabilidad, merecedor de una especial consideración, así como con la necesidad de avanzar en la concesión de algunos beneficios conforme el principio de progresividad que caracteriza el Sistema de Seguridad Social Integral.

Aunado, esta postura no desentona con la decisión de la Corte Constitucional en sentencia C-989 de 2006, pues si bien en dicha providencia se acudió a las expresiones «madre cabeza de familia» y «padre cabeza de familia», ello no tuvo como fin darle el significado entendido por el ad quem, en tanto en dicha oportunidad, esos conceptos se equipararon a los de «madre trabajadora» y «padre trabajador», para excluir una discriminación por razones de género en vista que la norma solo aludía al primero de ellos.

Tampoco contradice lo adocinado por esta Sala en sentencia CSJ SL785-2013, 6 nov. 2013, rad. 40517, en la medida que, en esa oportunidad, se acudió al concepto de madre cabeza de familia, por razón de que la demandante tenía tal condición; no obstante, esa circunstancia no fue asimilada a la noción de dependencia económica; al contrario, en dicha providencia se hizo alusión «a la responsabilidad alimentaria que le asigna la ley a los padres», como un factor para efectos de verificar tal requisito que, dicho sea de paso, en ese asunto no era objeto de discusión (resaltado fuera del texto original)...”.

En cuanto al cumplimiento de requisitos del caso concreto, no se encuentran en discusión el estado de invalidez, la densidad de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensiones, ni la dependencia económica.

Frente al último requisito fueron presentados los testigos Sandra Milena Puerta Vélez (nuera del actor), Magdalena Emilse Henao y Luis Reinaldo Londoño Morales (cuñada y padre de la señora Blanca Rosa Londoño Ospina, cónyuge del accionante), quienes al unísono afirmaron que Irsa Lorena Valencia Londoño presenta un estado de invalidez que no le permite valerse por sí misma, por lo que requiere de silla de ruedas y de la ayuda de sus padres para su movilidad, alimentación y cuidados personales. Que la cónyuge del actor, la señora Blanca Rosa Londoño Ospina, desde hace varios años padece de dolores en la columna,

que le impide atender la movilidad y el traslado de Irsa Lorena, por ello, necesita del auxilio de su cónyuge para tal fin. Que ambos atienden el cuidado de su hija. Que el señor Hernán Horacio Valencia Aguilar es quien suple las necesidades económicas de su hija discapacitada, debido a que su cónyuge es ama de casa y no recibe ayuda económica de terceros. Y que el actor trabajó hasta 2015 para una empresa y en la actualidad se encuentra pensionado.

Declarantes que, a la luz de la sana crítica y, a criterio de la Sala, devienen totalmente admisibles y creíbles, dado que se evidencian coherentes, responsivas y precisas. Prueba testimonial que además se exhibe totalmente diáfana y clara, sin que resista su contenido cuestionamiento alguno, pues los deponentes pertenecen al grupo familiar del demandante y sin duda alguna tienen conocimiento directo sobre la dependencia económica de Irsa Lorena Valencia Londoño respecto de su padre.

## **DEL RETROACTIVO PENSIONAL**

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 739 de 10 de marzo de 2021, Radicado 69.642, precisó que, aunque la desvinculación laboral del afiliado no constituye un presupuesto de la existencia del derecho pensional, si representa, una condición para el disfrute y permanencia de este régimen especial de pensión de vejez, y en el asunto objeto de controversia señaló:

*“...Ahora bien, al proceder la Sala a establecer la específica situación del demandante al momento de elevar la reclamación administrativa de la prestación, se observa que si bien en el plenario no está acreditada la fecha de desvinculación laboral del actor, pues éste en el interrogatorio de parte absuelto el 19 de julio de 2011, confesó que para dicha calenda aún estaba laborando (folios 40 vuelto, cuaderno principal); así mismo, de lo expresado por los declarantes que comparecieron al proceso, se infiere que el actor laboró hasta agosto de 2013 (folios 90 a 94, cuaderno principal), y a folios 95 a 98, reposa la Resolución N°. GNR185240 del 17 de julio de 2013, proveniente de Colpensiones, notificada personalmente al pensionado el 14 de agosto de la misma anualidad, tal circunstancia en nada impide que el reconocimiento del derecho a la pensión especial por hijo invalido, se*

*haga desde la calenda en que fue ordenada por el juez de primer grado, esto el 15 de abril de 2010, incluyendo las mesadas adicionales, en tanto para ese momento el actor ya tenía consolidado los requisitos legales para el efecto.*

*Se afirma lo anterior, por cuanto si bien el demandante no se desvinculó del servicio del empleador, ello fue como consecuencia del actuar equivocado de la entidad administradora de pensiones, en tanto consideró que no tenía los requisitos para acceder al derecho pensional, a pesar de que tal y como se dejó visto, sí era titular del derecho pensional especial de vejez, desde la fecha precisada por el a quo.*

*Por su parte, como la entidad de seguridad social demandada le reconoció al actor la pensión ordinaria de vejez, a partir del 1 de agosto de 2013, en cuantía inicial de \$915.941, esto es, una prestación diferente a la que fue reclamada en este proceso, no obstante tener derecho a la especial de vejez por hijo invalido a partir de la calenda ya referenciada, se confirmará la sentencia de primer grado, en cuanto dispuso el reconocimiento de esta última, sin perjuicio de que el demandante pueda renunciar a esta pensión especial, a fin de poder seguir percibiendo el derecho a la de vejez que le viene cancelado la demandada, por reunir los requisitos del sistema general de pensiones, lo cual como ya se constató, tuvo lugar en el presente asunto...”.*

En este juicio, en la diligencia de interrogatorio de parte realizada en la audiencia celebrada el 25 de julio de 2018, el señor Hernán Horacio Valencia Aguilar afirmó que laboró como trabajador dependiente en la empresa PPG hasta el 9 de diciembre de 2015, conforme la jurisprudencia transcrita en antecedentes, tal circunstancia en nada impide que el reconocimiento del derecho a la pensión especial por hija invalida, se haga desde la calenda en que fue peticionada en la demanda, esto es, desde el 1º de enero de 2015, en tanto para ese momento el actor ya tenía consolidado los requisitos legales para el efecto, toda vez la Resolución GNR 44082 de 10 de febrero de 2016, da cuenta que el mencionado aportó al sistema general de pensiones hasta el 9 de diciembre de 2015 un total de 1.380 semanas, colmando la densidad de 1.300 requeridas, en el ciclo junio de 2014.



Corolario de lo anterior, si bien el demandante no se desvinculó del servicio del empleador y continuó el vínculo laboral hasta el 9 de diciembre de 2015, ello fue como consecuencia del actuar equivocado de Colpensiones, en tanto en el acto administrativo GNR 425392 de 16 de diciembre de 2014, notificado 3 días después y confirmado en las Resoluciones GNR 127348 de 30 de abril y VPB 70055 de 11 de noviembre de 2015, consideró que no tenía los requisitos para acceder a prestación especial económica, a pesar de que tal y como se dejó visto, sí era titular del derecho pensional, máxime que le indicó al afiliado que para que procediera el reconocimiento de la prestación “...*debía estar cotizando al sistema general de pensiones al momento de la solicitud pensional...*”.

Adicionalmente, ha de recordarse que la demanda constituye la causa, la razón por la cual se ruega el derecho, los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada sentencia, que por disposición del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, deben aparecer expresados en todo el escrito demandatorio, y surgen de los hechos del mismo, por cuanto del análisis de ellos versa la parte resolutive de la sentencia.

La Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha señalado que es base esencial del debido proceso laboral, que las sentencias se enmarquen en las pretensiones impetradas por la parte actora y, además, que tales resoluciones se acoplen a la causa petendi invocada por el promotor del proceso, puesto que las pretensiones, si bien delimitan los términos exactos del litigio a resolver, están conformadas por razones de hecho y de derecho (Sentencia SL 911 de 9 de febrero de 2016, Radicado 53.019).

Conforme a lo decidido por el Alto Tribunal en mención, acorde al viejo aforismo “*dadme los hechos y yo os daré el derecho*”, le corresponde al juez al resolver el litigio a partir de los hechos acreditados en el plenario, subsumirlos en la norma que consagra el derecho en discusión, dado que conforme al mandato superior del artículo 230 constitucional, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

Aunado a ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha adocinado que la demanda es el escrito mediante el cual se ejerce el derecho subjetivo público de acción, es decir, se formula a la Rama Judicial del Estado la petición de que administre justicia y con tal fin decida sobre las pretensiones contenidas en ella, a través de un proceso. La demanda es la base, junto con la contestación del demandado, para el desarrollo del proceso judicial por los sujetos del mismo, o sea, el juez, las partes y los intervinientes, y, por tanto, la base para dictar la sentencia que pone fin al proceso, y tiene legalmente efectos jurídicos importantes, como son, entre otros, la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad, la radicación de la competencia en un determinado funcionario y la consonancia de la sentencia (Sentencia C-1069 de 3 de diciembre de 2002).

La demanda que dio origen a este proceso se instauró en contra de Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión especial de vejez por hija inválida causado desde el 1° de enero de 2015, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio indexación y costas del proceso.

En consecuencia, se revocará la providencia absolutoria en este sentido, y en su lugar se concederá el retroactivo pensional desde el 1° de enero de 2015.

## **DE LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En el caso del demandante al haber Colpensiones liquidado la prestación económica teniendo en cuenta las semanas cotizadas hasta el 9 de diciembre de 2015, fecha de la última cotización al sistema de pensiones, es procedente revisar el ingreso base de liquidación del pensionado con las semanas cotizadas hasta el 1° de enero de 2015, para determinar la cuantía de la mesada pensional.

Elaborada la liquidación con fundamento en la historia laboral que obra en el expediente, conforme a los derroteros trazados en la fórmula matemática adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias de 15 de marzo y 20 de abril de 2007, Radicados 29.986 y 29.470,

respectivamente, tal como se registra en la liquidación, el ingreso base de liquidación calculado con el promedio salarial de lo cotizado por el actor durante los diez años anteriores a la fecha del reconocimiento de la pensión especial de vejez por hija discapacitada, esto es, el 1° de enero de 2015, asciende a \$1.606.396; valor que con una tasa de reemplazo del 64.25%, arroja una mesada pensional de \$1.032.166, para 2015, inferior a la calculada por Colpensiones en la Resolución GNR 440082 de 10 de febrero de 2016, que para el año 2016 ascendió a \$1.197.500, misma que deflactada a 2015, equivale a \$1.121.570.

Se advierte que no fue allegada la historia laboral tipo CAN con el detalle del ingreso base de cotización mes a mes entre los periodos 1967 a 1994 del señor Hernán Horacio Valencia Aguilar, por lo que se desconocen los IBC de toda la vida laboral, no siendo posible realizar el cálculo del ingreso base de liquidación bajo tales parámetros.

CALCULO IBL ULTIMOS 10 AÑOS			
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL			

F. INICIAL	1-sep-04	TOTAL DIAS	3600
F. FINAL	1-ene-15		

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-sep-04	30-sep-04	\$ 685.376	29	\$ 1.065.114	\$ 8.580	2014	82,47	2003	53,07
1-oct-04	31-oct-04	\$ 792.567	30	\$ 1.231.695	\$ 10.264	2014	82,47	2003	53,07
1-nov-04	30-nov-04	\$ 940.686	30	\$ 1.461.880	\$ 12.182	2014	82,47	2003	53,07
1-dic-04	31-dic-04	\$ 768.530	30	\$ 1.194.340	\$ 9.953	2014	82,47	2003	53,07
1-ene-05	31-ene-05	\$ 756.837	30	\$ 1.114.878	\$ 9.291	2014	82,47	2004	55,98
1-feb-05	28-feb-05	\$ 692.260	30	\$ 1.019.751	\$ 8.498	2014	82,47	2004	55,98
1-mar-05	31-mar-05	\$ 1.083.388	30	\$ 1.595.912	\$ 13.299	2014	82,47	2004	55,98
1-abr-05	30-abr-05	\$ 896.477	30	\$ 1.320.578	\$ 11.005	2014	82,47	2004	55,98
1-may-05	31-may-05	\$ 1.082.696	30	\$ 1.594.893	\$ 13.291	2014	82,47	2004	55,98
1-jun-05	30-jun-05					2014	82,47	2004	55,98
1-jul-05	31-jul-05	\$ 1.192.072	30	\$ 1.756.012	\$ 14.633	2014	82,47	2004	55,98
1-ago-05	31-ago-05	\$ 1.118.694	30	\$ 1.647.921	\$ 13.733	2014	82,47	2004	55,98
1-sep-05	30-sep-05	\$ 1.023.507	30	\$ 1.507.703	\$ 12.564	2014	82,47	2004	55,98
1-oct-05	31-oct-05					2014	82,47	2004	55,98

1-nov-05	30-nov-05	\$ 1.102.079	30	\$ 1.623.446	\$ 13.529	2014	82,47	2004	55,98
1-dic-05	31-dic-05	\$ 863.249	30	\$ 1.271.631	\$ 10.597	2014	82,47	2004	55,98
1-ene-06	31-ene-06	\$ 985.433	30	\$ 1.384.403	\$ 11.537	2014	82,47	2005	58,70
1-feb-06	28-feb-06					2014	82,47	2005	58,70
1-mar-06	31-mar-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-abr-06	30-abr-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-may-06	31-may-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-jun-06	30-jun-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-jul-06	31-jul-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-ago-06	31-ago-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-sep-06	30-sep-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-oct-06	31-oct-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-nov-06	30-nov-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-dic-06	31-dic-06	\$ 799.999	30	\$ 1.123.893	\$ 9.366	2014	82,47	2005	58,70
1-ene-07	31-ene-07	\$ 837.499	30	\$ 1.126.147	\$ 9.385	2014	82,47	2006	61,33
1-feb-07	28-feb-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-mar-07	31-mar-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-abr-07	30-abr-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-may-07	31-may-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-jun-07	30-jun-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-jul-07	31-jul-07					2014	82,47	2006	61,33
1-ago-07	31-ago-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-sep-07	30-sep-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-oct-07	31-oct-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-nov-07	30-nov-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-dic-07	31-dic-07	\$ 1.000.000	30	\$ 1.344.655	\$ 11.205	2014	82,47	2006	61,33
1-ene-08	31-ene-08	\$ 1.000.000	30	\$ 1.272.215	\$ 10.602	2014	82,47	2007	64,82
1-feb-08	29-feb-08	\$ 1.000.000	30	\$ 1.272.215	\$ 10.602	2014	82,47	2007	64,82
1-mar-08	31-mar-08	\$ 1.133.000	30	\$ 1.441.420	\$ 12.012	2014	82,47	2007	64,82
1-abr-08	30-abr-08	\$ 1.237.000	30	\$ 1.573.730	\$ 13.114	2014	82,47	2007	64,82
1-may-08	31-may-08	\$ 1.100.000	30	\$ 1.399.436	\$ 11.662	2014	82,47	2007	64,82
1-jun-08	30-jun-08	\$ 1.100.000	30	\$ 1.399.436	\$ 11.662	2014	82,47	2007	64,82
1-jul-08	31-jul-08	\$ 1.100.000	30	\$ 1.399.436	\$ 11.662	2014	82,47	2007	64,82
1-ago-08	31-ago-08	\$ 1.100.000	30	\$ 1.399.436	\$ 11.662	2014	82,47	2007	64,82
1-sep-08	30-sep-08	\$ 1.100.000	30	\$ 1.399.436	\$ 11.662	2014	82,47	2007	64,82

1-oct-08	31-oct-08	\$ 1.100.000	30	\$ 1.399.436	\$ 11.662	2014	82,47	2007	64,82
1-nov-08	30-nov-08	\$ 1.100.000	30	\$ 1.399.436	\$ 11.662	2014	82,47	2007	64,82
1-dic-08	31-dic-08	\$ 1.100.000	30	\$ 1.399.436	\$ 11.662	2014	82,47	2007	64,82
1-ene-09	31-ene-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-feb-09	28-feb-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-mar-09	31-mar-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-abr-09	30-abr-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-may-09	31-may-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-jun-09	30-jun-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-jul-09	31-jul-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-ago-09	31-ago-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-sep-09	30-sep-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-oct-09	31-oct-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-nov-09	30-nov-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-dic-09	31-dic-09	\$ 1.100.000	30	\$ 1.299.688	\$ 10.831	2014	82,47	2008	69,80
1-ene-10	31-ene-10	\$ 1.100.000	30	\$ 1.274.182	\$ 10.618	2014	82,47	2009	71,20
1-feb-10	28-feb-10	\$ 1.100.000	30	\$ 1.274.182	\$ 10.618	2014	82,47	2009	71,20
1-mar-10	31-mar-10	\$ 1.150.000	30	\$ 1.332.099	\$ 11.101	2014	82,47	2009	71,20
1-abr-10	30-abr-10	\$ 1.150.000	30	\$ 1.332.099	\$ 11.101	2014	82,47	2009	71,20
1-may-10	31-may-10	\$ 1.150.000	30	\$ 1.332.099	\$ 11.101	2014	82,47	2009	71,20
1-jun-10	30-jun-10	\$ 1.150.000	30	\$ 1.332.099	\$ 11.101	2014	82,47	2009	71,20
1-jul-10	31-jul-10	\$ 1.150.000	30	\$ 1.332.099	\$ 11.101	2014	82,47	2009	71,20
1-ago-10	31-ago-10	\$ 1.150.000	30	\$ 1.332.099	\$ 11.101	2014	82,47	2009	71,20
1-sep-10	30-sep-10	\$ 1.150.000	30	\$ 1.332.099	\$ 11.101	2014	82,47	2009	71,20
1-oct-10	31-oct-10	\$ 1.060.000	30	\$ 1.227.848	\$ 10.232	2014	82,47	2009	71,20
1-nov-10	30-nov-10	\$ 1.212.000	30	\$ 1.403.916	\$ 11.699	2014	82,47	2009	71,20
1-dic-10	31-dic-10	\$ 1.198.000	30	\$ 1.387.700	\$ 11.564	2014	82,47	2009	71,20
1-ene-11	31-ene-11	\$ 1.246.000	30	\$ 1.398.937	\$ 11.658	2014	82,47	2010	73,45
1-feb-11	28-feb-11	\$ 1.203.000	30	\$ 1.350.659	\$ 11.255	2014	82,47	2010	73,45
1-mar-11	31-mar-11	\$ 1.758.000	30	\$ 1.973.781	\$ 16.448	2014	82,47	2010	73,45
1-abr-11	30-abr-11	\$ 1.811.000	30	\$ 2.033.286	\$ 16.944	2014	82,47	2010	73,45
1-may-11	31-may-11	\$ 1.771.000	30	\$ 1.988.377	\$ 16.570	2014	82,47	2010	73,45
1-jun-11	30-jun-11	\$ 1.815.000	30	\$ 2.037.777	\$ 16.981	2014	82,47	2010	73,45
1-jul-11	31-jul-11	\$ 2.265.000	30	\$ 2.543.011	\$ 21.192	2014	82,47	2010	73,45
1-ago-11	31-ago-11	\$ 1.885.000	30	\$ 2.116.369	\$ 17.636	2014	82,47	2010	73,45

1-sep-11	30-sep-11	\$ 1.737.000	30	\$ 1.950.203	\$ 16.252	2014	82,47	2010	73,45
1-oct-11	31-oct-11	\$ 1.836.000	30	\$ 2.061.355	\$ 17.178	2014	82,47	2010	73,45
1-nov-11	30-nov-11	\$ 1.728.000	30	\$ 1.940.099	\$ 16.167	2014	82,47	2010	73,45
1-dic-11	31-dic-11	\$ 1.657.000	30	\$ 1.860.384	\$ 15.503	2014	82,47	2010	73,45
1-ene-12	31-ene-12	\$ 1.671.000	30	\$ 1.808.686	\$ 15.072	2014	82,47	2011	76,19
1-feb-12	29-feb-12	\$ 1.660.000	30	\$ 1.796.779	\$ 14.973	2014	82,47	2011	76,19
1-mar-12	31-mar-12	\$ 1.850.000	30	\$ 2.002.435	\$ 16.687	2014	82,47	2011	76,19
1-abr-12	30-abr-12	\$ 1.589.000	30	\$ 1.719.929	\$ 14.333	2014	82,47	2011	76,19
1-may-12	31-may-12	\$ 1.896.000	30	\$ 2.052.225	\$ 17.102	2014	82,47	2011	76,19
1-jun-12	30-jun-12	\$ 1.793.000	30	\$ 1.940.738	\$ 16.173	2014	82,47	2011	76,19
1-jul-12	31-jul-12	\$ 1.657.000	30	\$ 1.793.532	\$ 14.946	2014	82,47	2011	76,19
1-ago-12	31-ago-12	\$ 1.832.000	30	\$ 1.982.952	\$ 16.525	2014	82,47	2011	76,19
1-sep-12	30-sep-12	\$ 1.920.000	30	\$ 2.078.203	\$ 17.318	2014	82,47	2011	76,19
1-oct-12	31-oct-12	\$ 1.788.000	30	\$ 1.935.326	\$ 16.128	2014	82,47	2011	76,19
1-nov-12	30-nov-12	\$ 2.029.000	30	\$ 2.196.184	\$ 18.302	2014	82,47	2011	76,19
1-dic-12	31-dic-12	\$ 2.099.000	30	\$ 2.271.952	\$ 18.933	2014	82,47	2011	76,19
1-ene-13	31-ene-13	\$ 3.131.000	30	\$ 3.308.414	\$ 27.570	2014	82,47	2012	78,05
1-feb-13	28-feb-13	\$ 1.797.000	30	\$ 1.898.825	\$ 15.824	2014	82,47	2012	78,05
1-mar-13	31-mar-13	\$ 1.885.000	30	\$ 1.991.811	\$ 16.598	2014	82,47	2012	78,05
1-abr-13	30-abr-13	\$ 2.042.000	30	\$ 2.157.707	\$ 17.981	2014	82,47	2012	78,05
1-may-13	31-may-13	\$ 2.194.000	30	\$ 2.318.320	\$ 19.319	2014	82,47	2012	78,05
1-jun-13	30-jun-13	\$ 2.244.000	30	\$ 2.371.153	\$ 19.760	2014	82,47	2012	78,05
1-jul-13	31-jul-13	\$ 2.095.000	30	\$ 2.213.711	\$ 18.448	2014	82,47	2012	78,05
1-ago-13	31-ago-13	\$ 1.954.000	30	\$ 2.064.721	\$ 17.206	2014	82,47	2012	78,05
1-sep-13	30-sep-13	\$ 1.885.000	30	\$ 1.991.811	\$ 16.598	2014	82,47	2012	78,05
1-oct-13	31-oct-13	\$ 2.324.000	30	\$ 2.455.687	\$ 20.464	2014	82,47	2012	78,05
1-nov-13	30-nov-13	\$ 1.952.000	30	\$ 2.062.608	\$ 17.188	2014	82,47	2012	78,05
1-dic-13	31-dic-13	\$ 2.056.000	30	\$ 2.172.501	\$ 18.104	2014	82,47	2012	78,05
1-ene-14	31-ene-14	\$ 2.692.000	30	\$ 2.790.465	\$ 23.254	2014	82,47	2013	79,56
1-feb-14	28-feb-14	\$ 1.636.000	30	\$ 1.695.840	\$ 14.132	2014	82,47	2013	79,56
1-mar-14	31-mar-14	\$ 1.781.000	30	\$ 1.846.143	\$ 15.385	2014	82,47	2013	79,56
1-abr-14	30-abr-14	\$ 1.868.000	30	\$ 1.936.325	\$ 16.136	2014	82,47	2013	79,56
1-may-14	31-may-14	\$ 1.990.000	30	\$ 2.062.788	\$ 17.190	2014	82,47	2013	79,56
1-jun-14	30-jun-14	\$ 1.942.000	30	\$ 2.013.032	\$ 16.775	2014	82,47	2013	79,56
1-jul-14	31-jul-14	\$ 2.307.000	30	\$ 2.391.383	\$ 19.928	2014	82,47	2013	79,56

1-ago-14	31-ago-14	\$ 2.121.000	30	\$ 2.198.579	\$ 18.321	2014	82,47	2013	79,56
1-sep-14	30-sep-14	\$ 1.978.000	30	\$ 2.050.349	\$ 17.086	2014	82,47	2013	79,56
1-oct-14	31-oct-14	\$ 1.753.000	30	\$ 1.817.119	\$ 15.143	2014	82,47	2013	79,56
1-nov-14	30-nov-14	\$ 1.580.000	30	\$ 1.637.791	\$ 13.648	2014	82,47	2013	79,56
1-dic-14	31-dic-14	\$ 1.548.000	30	\$ 1.604.621	\$ 13.372	2014	82,47	2013	79,56
1-ene-15	1-ene-15	\$ 2.178.000	1	\$ 2.178.000	\$ 605	2014	82,47	2014	82,47

Últimos 10 años laborados	
TOTAL	360
DÍAS	0
	514,
TOTAL SEMANAS	29

Toda la vida laboral	
TOTAL DÍAS	9406
TOTAL	
SEMANAS	1343,71

Ingreso Base de Liquidacion -IBL-	\$ 1.606.396,78
Semanas Cotizadas	1.343,71
Tasa de reemplazo	64,25%
Valor pensión	\$ 1.032.166

TASA DE REEMPLAZO ARTÍCULO 10 DE LA LEY 797 DE 2003		
r = 65.50 - 0.50 s r = porcentaje del ingreso de liquidación. s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.		
Salario mínimo	2015	\$ 644.350
Salario mínimo dentro del IBL		2,493050023
Porcentaje IBL (r=)		64,25
Semanas mínimas requeridas		1.300
semanas adicionales a las mínimas requeridas		43,71
Grupo de 50 semanas adicionales a las mínimas		0
1,5 x Grupo de 50 semanas		0,00
r		64,25
Tasa de reemplazo		64,25
		64,25%

DE LA PRESCRIPCIÓN.

En lo que respecta a la prescripción, conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se hace exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por

el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

El artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el mismo texto alusivo a la interrupción de la prescripción.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esta Sala de Decisión comparte, el análisis consonante de los preceptos lleva a concluir que únicamente es posible interrumpir la prescripción una vez (Sentencia de 21 de febrero de 2012, Radicado 41.908 y SL 374 de 12 febrero de 2020, Radicado 67.868).

El demandante le reclamó administrativamente a Colpensiones el 31 de julio de 2014 la pensión de vejez especial de vejez por hija discapacitada, y esta entidad se la negó por medio de la Resolución GNR 425392 de 16 de diciembre de 2014, notificada 3 días después; frente al acto administrativo fueron interpuestos los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales se desataron de manera desfavorable a través de las Resoluciones GNR 127348 de 30 de abril y VPB 70055 de 11 de noviembre de 2015, esta última notificada 7 días después; y la demanda que dio origen a este proceso se presentó el 23 de septiembre de 2016, quiere ello decir que no operó en este caso el fenómeno de la prescripción.

Las mesadas pensionales de 2015 (reconocida y liquidada en esta instancia) y de 2016 (calculada por Colpensiones en la Resolución GNR 440082 de 10 de febrero de 2016), equivalen en su orden a: \$1.032.166 y a \$1.197.500, y al demandante le corresponde por retroactivo pensional causado entre el 1º de enero de 2015 y el 31 de enero de 2016, la suma de Catorce Millones Seiscientos Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos (\$14.615.658), de acuerdo a la siguiente liquidación.



AÑO	IPC	VALOR MESADA	NUMERO MESES	TOTAL
2015	6,77%	\$ 1.032.166	13	\$ 13.418.158
2016	5,75%	\$ 1.197.500	1	\$ 1.197.500
				<b>TOTAL \$14.615.658</b>

Lo anterior sin perjuicio de que el actor siga percibiendo el valor de la mesada pensional que le viene cancelado Colpensiones según lo dispuesto en el acto administrativo GNR 440082 de 10 de febrero de 2016.

**DE LOS INTERESES MORATORIOS**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prescribe que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata la normatividad mencionada, la entidad administradora correspondiente debe reconocer y pagar al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a recibir el pago de las mesadas pensionales emerge del cumplimiento de los requisitos que la Ley exige para poder acceder a la pensión reclamada.

Sin embargo, en sentencias de 29 de mayo de 2003, Radicado 18.789, 13 de junio de 2012, Radicado 42.783, y 6 de noviembre de 2013, Radicado 43.602, el Alto Tribunal precisó que no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios en aquellos eventos en que la decisión de las administradoras de pensiones públicas o privadas de negar una prestación encuentren plena justificación, bien porque tengan un respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la Ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los Jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a tales administradoras no les compete y les es imposible predecir. Lo anterior, teniendo en cuenta que en muchos casos la interpretación de la norma a la luz de los principios y objetivos

que informan la seguridad social no coincide con el texto literal del precepto que las administradoras deben aplicar al momento de definir la procedencia de la prestación reclamada.

En el presente caso la administradora de pensiones convocada a juicio, negó el reconocimiento del derecho pensional mediante las resoluciones GNR 425392 de 16 de diciembre de 2014, GNR 127348 de 30 de abril y VPB 70055 de 11 de noviembre de 2015, aduciendo que *“...revisado el expediente administrativo se evidencian declaraciones extra juicio, pero estas no determinan la calidad de padre cabeza de familia, ni que cuyos miembros dependan económicamente de él, de igual forma tampoco se acredita que tiene un trabajo que le impide atender a su hija invalida, y que de dicho ingreso depende el sustento familiar, manifestaciones que deben ser indicadas en dichas declaraciones extra juicio de manera expresa...”*, esto es, realizó una aplicación literal de la ley, decisión que, en este momento, aunque no es compartida por la Sala, fue justificada por la entidad demandada, lo cual permite absolver de los respectivos intereses moratorios en comentario.

Ahora bien, como se pretendió de forma subsidiaria la **INDEXACIÓN**, esta se otorgará, porque es el mecanismo objetivo de corrección monetaria que se aplica cuando las entidades administradoras que integran el sistema de seguridad social pagan tardíamente las obligaciones a su cargo, y la ley no prevé otra forma de solucionar su detrimento económico. Por lo tanto, se condenará a Colpensiones a reconocer y pagar al señor Hernán Horacio Valencia Aguilar las mesadas pensionales adeudadas, debidamente indexadas.

## **DE LOS APORTES EN SALUD**

Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, la cotización para salud establecida en el Sistema General de Salud para los pensionados está en su totalidad a cargo de éstos.

Acorde al criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que esta Sala de Decisión comparte, el descuento por salud constituye una condición esencial y necesaria al reconocimiento de la pensión, que opera por

virtud de la Ley y se encuentra estrechamente relacionada con los principios que irradian el Sistema General de Seguridad Social, motivo por el cual el Juez al otorgar el derecho está facultado para autorizarla, porque el pagador de la entidad administradora es el llamado a hacerla efectiva y trasladarla a la EPS correspondiente. (Sentencias de 21 de junio de 2011, Radicado 48.003; 14 de febrero de 2012, Radicado 47.378; 6 de marzo de 2012, Radicado 47.528 y SL 1478 de 9 de mayo de 2018, Radicado 63.512).

En criterio de la Corporación mencionada, de no efectuarse tales descuentos, se desconocerían los principios orientadores de la prestación del servicio público esencial de seguridad social consagrados en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, en especial, los de universalidad y solidaridad, y los rectores del servicio público de la seguridad social en salud de que trata específicamente el Decreto 1920 de 1994. Adicionalmente, tal omisión podría comprometer los derechos de acceso a los servicios de alto costo que requieren un mínimo de semanas cotizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, se autorizará a Colpensiones para descontar del retroactivo pensional reconocido al accionante, la suma que por concepto de aportes al sistema general de seguridad social en salud esté en la obligación de trasladar a la EPS a la cual se encuentre afiliado el pensionado.

En consideración a que la indexación se concede en favor del accionante, se precisa que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a tal actualización, por tanto, dichos valores no serán objeto de aplicación de la misma, pues no puede el citado beneficiarse de una actualización con base en una suma dineraria que corresponde al subsistema de salud.

## **DE LAS COSTAS**

Ante la prosperidad del recurso de apelación, las costas en ambas instancias corren a cargo de Colpensiones y en favor del señor Hernán Horacio Valencia Aguilar.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.160.000.

Así las cosas, se revocará la providencia que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

**PRIMERO:** Revocar la sentencia de primera instancia que se revisa en apelación. En su lugar:

- Se condena a Colpensiones a reconocer y pagar al señor Hernán Horacio Valencia Aguilar: la suma de Catorce Millones Seiscientos Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos (\$14.615.658) por retroactivo pensional causado entre el 1° de enero de 2015 y el 31 de enero de 2016. Sin perjuicio de que el actor siga percibiendo el valor de la mesada pensional que le viene cancelado Colpensiones según lo dispuesto en el acto administrativo GNR 440082 de 10 de febrero de 2016.

**SEGUNDO:** Se condena a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante el retroactivo pensional, reconocido en este juicio, debidamente indexado.

Lo anterior sin perjuicio de que el actor siga percibiendo el valor de la mesada pensional que le viene cancelado Colpensiones según lo dispuesto en el acto administrativo GNR 440082 de 10 de febrero de 2016.

**TERCERO:** Se autoriza a Colpensiones para descontar del retroactivo pensional reconocido en este juicio al actor, las sumas que por concepto de aportes al sistema general de seguridad social en Salud esté en la obligación de trasladar a la EPS a la cual se encuentre afiliado el pensionado, con la aclaración que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a la indexación.

**CUARTO:** Las costas en ambas instancias corren a cargo de Colpensiones y en favor del señor Hernán Horacio Valencia Aguilar.

En esta instancia se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.160.000.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**Firmado Por:**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1ca5593efb786111a0c26e188870ec00b48f13e604a390d2f16b3236afdab529**

Documento generado en 09/03/2023 02:18:33 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**